



Asamblea General

Distr. general
31 de julio de 2024
Español
Original: inglés

Septuagésimo noveno período de sesiones

Tema 115 c) del programa provisional*

**Elecciones para llenar vacantes en órganos subsidiarios
y otras elecciones: elección de miembros del Consejo de
Derechos Humanos**

**Nota verbal de fecha 29 de julio de 2024 dirigida al Presidente
de la Asamblea General por la Misión Permanente de Colombia
ante las Naciones Unidas**

La Misión Permanente de la República de Colombia ante las Naciones Unidas tiene el honor de referirse a la candidatura de Colombia al Consejo de Derechos Humanos para el período 2025-2027, cuyas elecciones tendrán lugar en octubre de 2024 en Nueva York.

De conformidad con la resolución [60/251](#) de la Asamblea General, la Misión Permanente de Colombia ante las Naciones Unidas tiene el honor también de transmitir por la presente sus promesas y compromisos voluntarios, en los que se reafirma que la promoción y la protección de los derechos humanos son una prioridad de la política exterior de la República de Colombia (véase el anexo).

La Misión Permanente de Colombia ante las Naciones Unidas agradecería que el Presidente de la Asamblea General tuviera a bien hacer distribuir la presente nota y su anexo como documento de la Asamblea General, en relación con el tema 115 c) del programa provisional.

* [A/79/150](#).



Anexo de la nota verbal de fecha 29 de julio de 2024 dirigida a la Presidencia de la Asamblea General por la Misión Permanente de Colombia ante las Naciones Unidas

[Original: español]

Candidatura de Colombia al Consejo de Derechos Humanos para el período 2025-2027

Promesas y compromisos voluntarios con arreglo a la resolución 60/251 de la Asamblea General

Derechos humanos para la paz

Introducción

1. El Gobierno de Colombia reconoce la mayor importancia a la promoción y la protección de los derechos humanos. En este espíritu, ha gestado la postulación de su candidatura al Consejo de Derechos Humanos para el período 2025-2027, destacando que es la primera vez desde la creación de este órgano que Colombia aspira a integrarlo.
2. Tal como lo consagra la Constitución Política de 1991, Colombia es un Estado social de derecho, con principios democráticos, participativos y pluralistas, con un compromiso integral de protección de los derechos humanos y el propósito de propender por soluciones estructurales a los problemas que han aquejado a la nación durante décadas.
3. La paz como un deber y un derecho fundamental según el artículo 22 de nuestra Constitución se ha desarrollado en la actualidad a través de nuevo contrato social tendiente a garantizar los derechos fundamentales de todas las colombianas y colombianos, cimentando que la promoción de alternativas pacíficas para la resolución de conflictos y la superación de violaciones sistemáticas a los derechos humanos son elementos esenciales para profundizar las democracias y construir sociedades.
4. Es así que la construcción del propósito y alcance de paz son pilares de la política exterior colombiana, en coherencia con la esencia misma de la misión del sistema de las Naciones Unidas e íntimamente ligada a la promoción y respeto de los derechos humanos, tal como lo profesa en su preámbulo la Declaración Universal de Derechos Humanos, en términos que mantienen plena validez casi ocho décadas después de haber sido adoptados: “La libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana”.
5. Por ende, Colombia ha ratificado los tratados universales fundamentales en materia de derechos humanos y ha reconocido la competencia de diversos órganos de supervisión para conocer peticiones individuales, tales como el Comité de Derechos Humanos, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, el Comité contra la Desaparición Forzada y el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial.
6. Así mismo, el Estado colombiano se encuentra al día en la presentación de cada uno de los informes convencionales ante los diversos órganos de tratados, y despliega sus esfuerzos para dar cumplimiento a las recomendaciones que se emiten. Con ello, es pertinente resaltar la reciente sustentación del informe nacional en el marco del examen periódico universal, realizada el pasado 7 de noviembre de 2023.

7. Teniendo esto en cuenta, Colombia se permite hacer las siguientes promesas voluntarias para su candidatura al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para el período 2025-2027:

I. Promesas voluntarias para la promoción y protección de los derechos humanos a nivel internacional

8. Colombia ofrece aportar al Consejo de Derechos Humanos, y a la comunidad internacional en general, su experiencia en dos áreas cruciales. De un lado, en relación con el abordaje a las graves violaciones de derechos humanos que durante décadas se derivaron en infracciones al derecho internacional humanitario, cometidas con ocasión del prolongado conflicto armado interno que hemos padecido en el país. Del otro lado, en relación con los diversos intentos de superación de la crisis de derechos humanos y de búsqueda de la paz, que sobrepasan cualquier anhelo y son palpables como objeto de estudio ante los diferentes procesos de diálogo que ha sostenido el Estado colombiano con grupos al margen de la ley a lo largo de los años de historia.

9. Colombia se compromete en el plano internacional y multilateral a privilegiar siempre y en toda circunstancia el diálogo y las alternativas pacíficas para la resolución de conflictos, en particular para promover la superación de situaciones manifiestas y sistemáticas de violaciones a los derechos humanos en el mundo, sobre la base del respeto a la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de Derechos Humanos, el derecho internacional de los derechos humanos, el derecho internacional humanitario y el derecho internacional de los refugiados.

10. Colombia mantendrá una política exterior orientada y estructurada en torno a la paz, la cual se sustenta a su vez en el respeto de los derechos humanos, los cuales son universales, indivisibles, interrelacionados e interdependientes. Por ello, su apuesta internacional consiste en promover los derechos humanos para la paz conforme a la política de Estado en esta materia, con el objetivo de propender por un orden social justo que asegure la convivencia pacífica y la protección de la naturaleza y de los derechos y libertades de las personas, lo cual implica profundizar los debates sobre situaciones apremiantes a nivel global que nos afectan a todos, tales como la crisis climática, el problema mundial de las drogas o la migración.

11. Colombia propenderá por fortalecer el diálogo constructivo, la negociación y la búsqueda del consenso, hasta donde sea posible, como pilares de trabajo del Consejo de Derechos Humanos, con el fin de evitar su politización y favorecer la cooperación transversal en la discusión en torno a los derechos humanos.

12. Colombia aplicará el principio general del derecho internacional según el cual los compromisos deben cumplirse de buena fe, y no solo observando las obligaciones adquiridas en virtud de los instrumentos internacionales ratificados. También haremos un esfuerzo por valorar con el mayor interés y respeto los diagnósticos y análisis de los órganos de tratados y de los procedimientos especiales de las Naciones Unidas, aplicando sus recomendaciones en la medida de lo posible.

13. Desde 2003, Colombia anunció una invitación permanente a los procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos, en virtud de la cual varios Relatores ya han visitado el país. El Gobierno del Cambio, en cabeza del Presidente Gustavo Petro y la Vicepresidenta Francia Márquez, mantendrá esta invitación y garantizará el trabajo constructivo y la regularidad de las visitas de los procedimientos especiales al país. Así se ha hecho ya con las visitas de la Representante Especial del Secretario General sobre la Violencia Sexual en los Conflictos; la Relatora Especial sobre la trata de personas, especialmente mujeres y niños; el Relator Especial sobre la Promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición; el

Relator Especial sobre los derechos de los Pueblos Indígenas; y el Grupo de Trabajo de Expertos sobre los Afrodescendientes.

14. Resulta esencial aunar esfuerzos para mejorar el funcionamiento y la efectividad del examen periódico universal, como un mecanismo de excepcional valor a nivel internacional en materia de derechos humanos. Colombia participará activamente en este espacio, tanto en la presentación de avances respecto a las recomendaciones que se le han formulado como en la formulación activa de recomendaciones que promuevan la objetividad y el diálogo constructivo.

15. Colombia se compromete a fortalecer los mecanismos del sistema internacional para avanzar en la garantía de los derechos de las mujeres con base en una política exterior feminista que oriente y garantice la participación plena, igualitaria y significativa de las mujeres en las máximas instancias de decisión. Por ello, continuará comprometida en la plena implementación de la resolución [1325 \(2000\)](#) del Consejo de Seguridad, relativa a las mujeres y la paz y la seguridad, incluyendo la adopción de un plan nacional de acción, y la implementación de las resoluciones relevantes aprobadas por el Consejo de Derechos Humanos y la Asamblea General de las Naciones Unidas. Con ello, dará la mayor prioridad a fortalecer el accionar y despliegue de implementación del enfoque de género, con el involucramiento de la mujer en la construcción de paz, la garantía de su participación en política y ampliando los esfuerzos de prevención de todas las formas de violencia contra la mujer y la sanción en los casos de vulneración de sus derechos.

16. Colombia continuará promoviendo el derecho a la igualdad y a la no discriminación para la garantía del ejercicio efectivo de los derechos de las personas LGBTIQ+. En ese sentido, apoya en forma consistente el lenguaje sobre el reconocimiento de formas múltiples e interseccionales de discriminación y sus impactos, así como la importancia de resaltar elementos de diversidad y la protección de los derechos humanos sin distinción alguna. Colombia ha apoyado el establecimiento del mandato del Experto Independiente sobre la protección contra la violencia y la discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género en el Consejo de Derechos Humanos, y seguirá promoviendo los derechos de las personas LGBTIQ+ en el marco de los trabajos de la Asamblea General.

17. Colombia continuará con su compromiso de protección de los derechos y garantía de pervivencia de las comunidades Afrodescendientes y los Pueblos Indígenas en el trabajo de las Naciones Unidas, con un enfoque en las medidas dirigidas a saldar las deudas que históricamente han afectado a estas poblaciones. Sostendrá los esfuerzos en los espacios que se ocupen de esta materia, como el Consejo de Derechos Humanos, la Asamblea General, el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas y el Foro Permanente sobre los Afrodescendientes, teniendo siempre en cuenta valiosos instrumentos internacionales como la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, la Declaración y el Programa de Acción de Durban y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales, entre otros.

18. Colombia trabajará de manera conjunta y en un espíritu cooperativo con la sociedad civil con el fin de reforzar su participación y sus contribuciones al trabajo del Consejo de Derechos Humanos.

19. Colombia promoverá espacios, resoluciones y otros mecanismos que permitan fortalecer y enriquecer las acciones tendientes a la consolidación de los sistemas nacionales de justicia transicional, con el fin de garantizar la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición. Estamos preparados para compartir nuestra vasta experiencia en la materia.

20. Para tener unas sociedades democráticas vibrantes, resulta esencial respaldar y fortalecer las políticas que garanticen la vida, dignidad y labor de las personas defensoras de derechos humanos y líderes sociales. Colombia se compromete a trabajar en el marco del Consejo de Derechos Humanos para defender su legítima labor y brindar garantías para su desarrollo, según lo acordado en la Declaración sobre los Defensores de los Derechos Humanos de 1998, aprobada por la resolución [53/144](#) de la Asamblea General, y en los demás documentos que la han desarrollado.

21. Colombia continuará implementando y abogando por la implementación de políticas en favor de la población migrante, con una perspectiva de derechos humanos, para combatir los abusos y peligros que pueden estar involucrados en el tránsito. Buscaremos lograr los objetivos planteados en el Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular, y promoveremos la ratificación universal de la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de Sus Familiares.

22. Colombia se compromete a proteger el derecho de toda persona, de las generaciones presentes y futuras, a vivir en un ambiente sano y al desarrollo sostenible, razón por la cual Colombia será la sede de la 16ª reunión de la Conferencia de las Partes en el Convenio sobre la Diversidad Biológica en 2024. También trabajará en pro de los derechos de acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales, como se establece en el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe (Acuerdo de Escazú), y promoverá la rendición de cuentas y el acceso a las reparaciones para las víctimas de violaciones de los derechos humanos relacionadas con actividades empresariales tanto a través de mecanismos voluntarios como de instrumentos jurídicamente vinculantes.

23. Colombia fortalecerá la interacción entre el sistema interamericano y el sistema universal de derechos humanos en su rol de promoción y protección de los derechos humanos en el contexto del cambio climático. Es indispensable consolidar normas y estándares internacionales claros y comunes a todos los Estados frente al impacto y efectividad de los derechos humanos en el marco de la emergencia ambiental, otorgando especial atención a los impactos que genera sobre las poblaciones más vulnerables.

24. Colombia considera fundamental que la discusión internacional en materia de drogas sea realmente integral y multidisciplinaria, dándole especial importancia a la garantía plena y efectiva de los derechos humanos en la implementación de las políticas internacionales y nacionales sobre drogas. En ese sentido, Colombia promoverá el posicionamiento permanente y recurrente de los asuntos sobre derechos humanos y drogas en el marco del Consejo de Derechos Humanos.

II. Promesas voluntarias para la promoción y protección de los derechos humanos a nivel nacional

25. Colombia está decidida a hacer todo lo que esté legítimamente a su alcance para superar la grave situación de derechos humanos que ha padecido durante años, caracterizada por un alto nivel de violencia sociopolítica, de exclusión social y de impunidad. En el Gobierno del Cambio, estamos empeñados en lograr que se termine de manera definitiva el conflicto armado que afecta al país.

26. Por ello, el Presidente Gustavo Petro impulsó la ley 2272 de 2022, en la cual se estableció que:

La política de paz es una política de Estado. Será prioritaria y transversal en los asuntos de Estado, participativa, amplia; incluyente e integral, tanto en lo referente a la implementación de acuerdos, como con relación a procesos de negociación, diálogo y sometimiento a la justicia. Los instrumentos de la paz total tendrán como finalidad prevalente el logro de la paz estable y duradera, con garantías de no repetición y de seguridad para todos los colombianos; estándares que eviten la impunidad y garanticen en el mayor nivel posible, los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación.

27. Para lograr lo anterior, el Gobierno nacional asumió el compromiso de cumplir con los mandatos que se derivan de una sociedad verdaderamente democrática. Como potencia de la vida que somos, debemos ser capaces de defender la diversidad, la igualdad, la justicia, la realización de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales y el fortalecimiento del Estado social de derecho.

28. Este propósito implica la defensa y realización de los principios consagrados en la Constitución Política de 1991 y en los tratados internacionales de derechos humanos y de derecho internacional humanitario ratificados por Colombia, los cuales tienen en nuestro ordenamiento jurídico un rango superior al de la ley. Los tratados del primer grupo prevalecen en el orden interno por mandato expreso del artículo 93 de la carta política. Los del segundo, según la jurisprudencia de la Corte Constitucional, integran el “bloque de constitucionalidad”.

29. El Gobierno nacional considera imperativo acatar e implementar de manera efectiva el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, suscrito entre el Estado y la entonces guerrilla de las FARC-EP en 2016; propender por la consecución de la paz total, basada en el respeto y la garantía de los derechos humanos y la territorialización de lo pactado; promover la justicia social y ambiental; y transitar hacia un Estado social y ambiental de derecho. Para Colombia, la construcción de la paz total comprende esfuerzos inclusivos para transformar territorios, combatir la violencia y proteger la vida mediante el diálogo y acuerdos con actores armados al margen de la ley, especialmente en territorios remotos y áreas urbanas afectadas por la pobreza e inequidad, fomentando la gobernanza en todo el país y fortaleciéndola especialmente en regiones fronterizas.

30. El Gobierno nacional apoya el sistema integral de justicia transicional establecido mediante el Acuerdo Final de 2016 y sus tres componentes: i) Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas; ii) Jurisdicción Especial para la Paz; y, iii) Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, que son los pilares en la garantía de la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición para las víctimas del conflicto.

31. Colombia continuará avanzando en la implementación de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, sancionada en 2011, y prorrogada por 10 años más en 2021, con la cual se busca reconocer, identificar y reparar a los más de 9 millones de víctimas del conflicto armado colombiano.

32. En el marco de la convivencia entre Campesinado, Pueblos Indígenas, Afrodescendientes, Negros, Raizales y Palenqueros, el Gobierno del Cambio promoverá el diálogo hacia una gobernanza intercultural, el fortalecimiento de los gobiernos propios, autonomía y la garantía del derecho a la consulta previa, libre e informada.

33. El Gobierno del Cambio del Presidente Gustavo Petro tiene como uno de sus objetivos reparar integralmente la deuda histórica con los Pueblos Indígenas, Afrodescendientes, Negros, Raizales y Palenqueros. Se trata de una meta que se ha contemplado a mediano y largo plazo, para que desde allí se construyan lineamientos y se sustenten las bases de una política pública contra el racismo.

34. Colombia, como una potencia de la vida, está convencida de que los cambios necesarios para los desafíos presentes y futuros se hacen realidad con las mujeres, y junto a ellas emprenderá las transformaciones necesarias para saldar la deuda histórica existente en términos de representación política, igualdad y autonomía.

35. Colombia tomará medidas decididas para fortalecer las capacidades de protección a la niñez a través de la cooperación y el diálogo internacional. Por ello, realizaremos todos los esfuerzos para lograr la erradicación de todo tipo de violencias contra los niños, niñas y adolescentes. Colombia será sede de la Primera Conferencia Ministerial Mundial para poner fin a la Violencia contra la Niñez, que tendrá lugar en Bogotá en noviembre de 2024.

36. El Gobierno del Cambio está transitando hacia un enfoque de seguridad humana y democratización del Estado basado en la igualdad, el respeto y la protección a la vida de la población. Será un enfoque basado en la superación del déficit de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales que permita forjar verdaderos proyectos de vida alejados del miedo y la incertidumbre.

37. Las nuevas políticas de protección que implementará el Gobierno nacional pretenden rescatar el enfoque de seguridad integral para la defensa de líderes y lideresas sociales y de las personas defensoras de derechos humanos a partir de un enfoque diferencial individual y colectivo que privilegie en los territorios la conservación de la vida de sus líderes y sus comunidades.

38. En este aspecto, el Gobierno nacional tendrá como objetivo central la prevención de hechos victimizantes y de agresión contra los liderazgos de comunidades Campesinas, Indígenas, Afrodescendientes, Negras, Raizales y Palenqueras, así como de la estigmatización y criminalización de estos liderazgos en el nuevo modelo de afrontamiento del narcotráfico, la minería ilegal y la deforestación en Colombia.

39. En materia de drogas, el Gobierno del Presidente Petro avanza en la implementación de una nueva política nacional, la cual está centrada en las personas y se fundamenta en un enfoque de derechos humanos. En este contexto, se entiende la necesidad de abordar la relación entre drogas y derechos humanos desde una aproximación holística y diferencial, de manera que se contrarresten los efectos nocivos que la implementación de políticas de fiscalización de drogas genera frente al respeto, protección y promoción de los derechos humanos y libertades fundamentales, y a su vez se atiendan las necesidades específicas de diferentes sectores poblacionales, especialmente de aquellos que han sido marginalizados o que se encuentran en situación de vulnerabilidad, como los Pueblos Indígenas, Afrodescendientes y Campesinos.

40. El Gobierno brindará todas las garantías para el ejercicio de los derechos a la libertad de expresión, a la movilización y la protesta social, al derecho a defender los derechos, en particular los derechos al territorio y al ambiente sano, el acceso a la información pública y la libertad de prensa.

41. El Gobierno nacional continuará implementando políticas en favor de la población migrante con un enfoque de regularización a fin de concretar procesos de inclusión económica y social.

42. El Gobierno nacional es consciente del impacto negativo de la crisis ambiental en el disfrute de los derechos humanos, especialmente sobre poblaciones históricamente marginadas y vulnerables. Su compromiso radica en la implementación de medidas de mitigación y acciones con enfoques diferenciales para reducir la vulnerabilidad ante el cambio climático.

43. En síntesis, Colombia se compromete a desarrollar al máximo su capacidad para promover y proteger los derechos humanos como base para el desarrollo de una sociedad más justa y el logro de una paz total en el país y también a nivel internacional, con miras a contribuir, con base en su propia experiencia, al adecuado funcionamiento del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y a la superación de las situaciones de violaciones de derechos humanos en todo el mundo.
